



Examinada su solicitud de informe, remitida a este Gabinete Jurídico, referente al Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de Protección de la Salud y Lucha contra el Dopaje en el Deporte y el Anteproyecto de Ley Orgánica complementaria de la misma, solicitado de esta Agencia Española de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 h) de la Ley Orgánica, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y 5 b) del Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, cúmpleme informarle lo siguiente:

Antes de entrar a analizar el texto sometido a informe es preciso señalar que, habida cuenta de la fundamentación legal del informe que inmediatamente va a evacuarse y su carácter preceptivo, a tenor de lo dispuesto en las normas que acaban de señalar, debería indicarse en la Exposición de Motivos de las normas que las mismas han sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

## I

Dicho lo anterior, los Anteproyectos sometidos a informe tienen por objeto la reforma de lo establecido en la Ley Orgánica 17/2006, de 21 de noviembre, diferenciándose el contenido de los mismos en el hecho de que los preceptos objeto de reforma tengan o no el carácter de Ley Orgánica conforme a lo establecido en la disposición final quinta de la norma objeto de reforma. Por este motivo, ambos textos serán objeto del mismo análisis a través del presente informe.

Conforme indica con mayor detalle la Exposición de Motivos del Anteproyecto de Ley sometido a informe, el propósito de la reforma operada por ambos textos es la adecuación del régimen vigente en materia de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje a lo contenido en el Convenio Internacional de Lucha contra el Dopaje, aprobado en el seno de la UNESCO el 19 de octubre de 2005 y que fue ratificado por España el 21 de octubre de 2006, entrando en vigor el 1 de febrero de 2007.

La propia Exposición de motivos recuerda que “La Convención contribuye a garantizar la eficacia del Código Mundial Antidopaje y ése es el gran cambio que anunciaba para un futuro inmediato la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 7/2006, antes transcrita parcialmente. Dado que éste es un documento no gubernamental aplicable únicamente a los miembros de organizaciones deportivas, la Convención proporciona el marco jurídico para que los Estados puedan abordar áreas específicas de los problemas propios del dopaje situadas fuera del alcance del movimiento deportivo. De esta forma, la Convención contribuye a formalizar las normas, políticas y directrices internacionales en el ámbito de la lucha contra el dopaje con el objetivo de



ofrecer un entorno de participación sano y equitativo para todos los deportistas”. En relación con la necesaria armonización de las normas nacionales de prevención del dopaje con el contenido de la Convención y con el Código Mundial Antidopaje, la Exposición de Motivos continúa indicando lo siguiente:

“Los Estados gozan de un cierto grado de flexibilidad con respecto a las modalidades idóneas para dar efecto a la Convención, ya sea mediante legislación, reglamentación, políticas o prácticas administrativas. No obstante, los Estados Parte están obligados a adoptar medidas específicas para restringir la disponibilidad de sustancias o métodos prohibidos entre los atletas (excepto a efectos médicos legítimos), comprendidas medidas contra su tráfico; facilitar los controles antidopaje y respaldar los programas nacionales de análisis; retirar el apoyo económico a los deportistas y personal de apoyo que hayan infringido la normativa antidopaje, o bien de las organizaciones deportivas que no se ajusten al Código; incentivar a los productores y distribuidores de suplementos nutricionales para que fijen las “prácticas más idóneas” en el etiquetado, comercialización y distribución de productos que puedan contener sustancias prohibidas; respaldar la oferta de educación antidopaje entre los deportistas y la comunidad deportiva en general.

Partiendo pues de estas premisas y, en especial, de la necesidad de armonización normativa y del expreso reconocimiento de que para conseguir tal fin han de homologarse los ordenamientos nacionales a los textos aprobados por la Agencia Mundial Antidopaje y teniendo en cuenta los importantes cambios operados en el Código Mundial Antidopaje, resulta evidente la necesidad de someter a una extensa e intensa revisión la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, toda vez que se trata de la norma que viene a operar como medio para la recepción de la normativa intencional en el ordenamiento jurídico español.

En este momento existen una serie de materias en la que, como consecuencia de la modificación del Código Mundial Antidopaje, la regulación nacional resulta incompatible con el Código y, por ende, con la Convención UNESCO, por lo que, siempre con base en el respeto debido a los principios e instituciones generales de nuestro ordenamiento jurídico, procede su modificación para conseguir una definitiva adecuación del contenido de la Ley con el Código Mundial Antidopaje”.

De este modo, ambos Anteproyectos establecen determinadas modificaciones que afectan esencialmente a la distribución competencial establecida en la vigente Ley 7/2006, el régimen sancionador, introduciendo nuevas normas en la tipificación de las infracciones y un nuevo sistema de graduación de las sanciones que procediera imponer, y un régimen de



cooperación internacional en materia de lucha contra el dopaje, derivado de la específica regulación establecida en determinadas normas relativas al suministro de información a la Agencia Mundial Antidopaje. Asimismo, se introduce un Anexo a la Ley Orgánica en el que se contienen las distintas denominaciones aplicables en términos idénticos a los contenidos en el Código Mundial Antidopaje.

## II

Por otra parte, y también dentro de estas consideraciones previas, debe señalarse que ninguno de los Anteproyectos sometidos a informe supone una modificación de las previsiones sustantivas establecidas en la Ley Orgánica 7/2006 en lo que se refiere a la específica remisión a las normas reguladoras del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.

De este modo, permanecen inalteradas las previsiones y remisiones específicas efectuadas por diversos preceptos de la Ley Orgánica en materia de protección de datos, tales como las establecidas en los artículos 5.5 (acceso del deportista a los datos relativos a su localización que estén siendo objeto de tratamiento), 6.3 (en lo referente al cumplimiento del deber de información en la realización de los controles), 7.1 (por el que se establece el carácter de documento sanitario del libro registro a que el mismo se refiere), 7.5 (por el que se prevé el sometimiento a la Ley Orgánica 15/1999 del citado libro registro y de los tratamientos relacionados con las autorizaciones de uso terapéutico) y 9.3 (referido a la garantía del derecho a la protección de datos en la práctica de los controles).

Tampoco son objeto de reforma las normas contenidas en el Título V de la Ley Orgánica 7/2006, relativo al sistema de información en materia de protección de la salud y contra el dopaje en el deporte en lo que afecta a la garantía del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.

Finalmente, permanecen con idéntica redacción las previsiones contenidas en el Capítulo V del Título I, que lleva por rúbrica “tratamiento de los datos relativos al dopaje y a la salud en el deporte”. Así, tras la entrada en vigor, en su caso, de los Anteproyectos sometidos a informe seguirán plenamente vigentes las previsiones contenidas en los artículos 34 y 36 de la Ley Orgánica, que establecen, respectivamente, lo siguiente:

***“Artículo 34. De la responsabilidad de los empleados públicos.***

***1. El personal que desempeñe las funciones de control del dopaje deberá guardar la confidencialidad y el secreto respecto de los asuntos que conozca por razón de su trabajo.***



*2. Los datos, informes o antecedentes obtenidos en el desarrollo de sus funciones sólo podrán utilizarse para los fines de control del dopaje y, en su caso, para la denuncia de hechos que puedan ser constitutivos de infracción administrativa o de delito.*

*3. Con independencia de la responsabilidad que proceda, de acuerdo con la legislación específica, en particular en materia de protección de datos de carácter personal, las infracciones en la custodia y, en su caso, la difusión de los datos relativos a los controles y procedimientos en materia de dopaje tienen la consideración de muy grave a los efectos de la legislación de los funcionarios públicos.*

*Asimismo, dichas conductas tendrán la consideración de infracción prevista en el apartado d) del artículo 54.2 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores respecto del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.*

*4. La determinación de estas responsabilidades corresponde a los órganos disciplinarios competentes en materia de función pública.*

#### **Artículo 36. Autorización de cesión de datos.**

*Los datos y ficheros relativos a los controles de dopaje podrán ser cedidos, en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, a los organismos públicos o privados de los que nuestro país sea parte y que participen en la lucha contra el dopaje en el ámbito deportivo, en el marco de lo que dispongan los compromisos internacionales legalmente vinculantes asumidos por España.*

### **III**

A la vista de lo anterior, deberán tomarse particularmente en cuenta en el análisis que se llevará a cabo en el presente informe los razonamientos y conclusiones alcanzadas en los anteriores informes de esta Agencia relacionados con las disposiciones que actualmente configuran el marco normativo en materia de protección de la salud y lucha contra el dopaje en el deporte.

En particular, deberá tenerse en consideración lo señalado en el informe de esta Agencia de 25 de octubre de 2005, referido al entonces Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Salud y de Lucha contra el Dopaje en el Deporte, y en el informe de 19 de noviembre de 2008, referido al entonces Borrador de Anteproyecto de Real Decreto de Protección de la Salud y Lucha contra el Dopaje en el Deporte.



En particular, resulta relevante tomar en consideración, por su posible trascendencia en el estudio que se realice a lo largo de este informe, lo indicado en el primer informe de los citados y reproducido por el segundo de ellos en cuanto a la finalidad que justificaba el tratamiento o cesión de los datos de carácter personal derivados de lo dispuesto en dichas normas:

*“Por otra parte, es preciso indicar que, según señala la Exposición de Motivos del Anteproyecto, en su apartado III, el fundamento del régimen previsto en el mismo deriva del artículo 43 de la Constitución, en el que, tras reconocerse el derecho a la protección de la salud, se señala en el apartado 2 que “Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto”, al propio tiempo que el apartado 3 indica que “Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio”.*

*De lo que acaba de indicarse, cabe deducir que el legislador viene a considerar el régimen regulador de la lucha contra el dopaje como parte de las actuaciones impuestas a los poderes públicos para garantizar, mediante la adopción de medidas de carácter preventivo, el derecho de los deportistas a la protección de la salud, sin perjuicio de que la detección de sustancias prohibidas pueda llevar aparejada la consecuencia de la adopción de las medidas disciplinarias que en su caso procedan.”*

#### IV

Hechas todas estas consideraciones previas, los Anteproyectos sometidos a informe inciden en materias propias de la normativa reguladora del derecho fundamental a la protección de datos en la regulación que en las mismas se establece de la comunicación de determinados datos a la Agencia Mundial Antidopaje, bien mediante su referencia directa, bien mediante la previsión legal de comunicación de los datos al sistema de gestión y administración antidopaje de dicha organización, denominado “ADAMS”.

Así, el apartado 28 del artículo único del Anteproyecto de Ley modifica el artículo 29 de la Ley Orgánica, estableciéndose en el primer inciso del primer párrafo del apartado 3 de dicho precepto que “En los casos no amparados en el apartado 2, la resolución podrá ser recurrida por el deportista o sujeto afectado por la resolución, por la eventual parte contraria en la resolución, por el organismo antidopaje del país de residencia del atleta, por la Agencia Estatal Antidopaje, por la federación deportiva internacional correspondiente y por la Agencia Mundial Antidopaje ante una sección específica de naturaleza arbitral constituida en el seno del Comité Español de Disciplina Deportiva” y



añadiéndose en su último párrafo que “Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia Mundial Antidopaje podrá recurrir la resolución ante el Tribunal Arbitral del Deporte en un plazo de veintidós días contados desde que haya transcurrido el plazo general de quince días sin que ninguno de los legitimados haya recurrido. A estos efectos, deberán comunicarse a la Agencia Mundial Antidopaje las fechas en que han tenido lugar las notificaciones a los diferentes legitimados para recurrir”.

Igualmente, el apartado 29 del artículo único del Anteproyecto de Ley modifica el artículo 31 de la Ley Orgánica, estableciendo que “la Agencia Estatal Antidopaje y la correspondiente organización internacional, podrán ordenar, sin menoscabo de las competencias autonómicas, la realización de controles fuera de competición a deportistas extranjeros que se encuentren en España y utilicen centros e instalaciones de entrenamiento de titularidad pública” y añadiendo que “a los efectos oportunos, los resultados analíticos serán comunicados a la respectiva federación deportiva internacional y a la Agencia Mundial Antidopaje”.

En cuanto a la utilización del sistema ADAMS, el Anexo introducido por el apartado 38 del artículo único del Anteproyecto de Ley lo define como “una herramienta para la gestión de bases de datos situada en un sitio web para introducir información, almacenarla, compartirla y elaborar informes con el fin de ayudar a las partes interesadas y a la AMA en sus actividades contra el dopaje junto con la legislación relativa a la protección de datos”.

El Anteproyecto de Ley se refiere expresamente a este sistema en la reforma operada en el artículo 7 de la Ley Orgánica 7/2006 por el apartado 6 del artículo único, al renumerar su apartado 4, que pasa a ser el quinto, añadiendo un párrafo tercero según el cual “las federaciones internacionales y la Agencia Estatal Antidopaje deberán comunicar inmediatamente a la Agencia Mundial Antidopaje a través del sistema ADAMS la concesión de cualquier autorización”.

Finalmente, el Anteproyecto de Ley Orgánica se refiere igualmente al sistema de información ADAMS en el apartado 1 de su artículo único, por el que se reforma el artículo 5 de la Ley Orgánica 7/2006, cuyo apartado 3 se refiere a los datos de localización de los deportistas. Así, tras indicarse que la obligación de facilitar los datos de localización será de aplicación a “cualquier deportista incluido en el Plan Individualizado previsto en el artículo 3.2 b)”, se añade que “esta información estará disponible a través de ADAMS y se mantendrá estrictamente confidencial en todo momento y se usará únicamente a efectos de planificación, coordinación y realización de controles, debiendo ser destruida cuando ya no sea útil para dichos fines”.

## V





Del último de los preceptos citados se deriva igualmente la existencia de una previsión con incidencia en materia de protección de datos, toda vez que el artículo 3.2 b) de la Ley Orgánica, 7/2006, en la versión prevista en el apartado 3 del artículo único del Anteproyecto de Ley sometido a informe establece que es función de la Agencia Estatal Antidopaje “aprobar el plan individualizado en el que se integrarán aquellos deportistas que en razón de circunstancias particulares, deban ser objeto de control y seguimiento específico”.

El desarrollo del citado plan implicará el tratamiento de datos de carácter personal de los deportistas a fin de incorporarlos o no al mismo. El mencionado tratamiento aparece actualmente recogido en el artículo 42 del Real Decreto 641/2009, de 17 de abril, por el que se regulan los procesos de control de dopaje y los laboratorios de análisis autorizados, y por el que se establecen medidas complementarias de prevención del dopaje y de protección de la salud en el deporte.

El citado artículo complementa lo establecido en el artículo 41, referido al Plan Individualizado de Controles, que será aprobado por la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje e incluirá “a los deportistas que, atendiendo a las circunstancias particulares de orden deportivo, médico o personal y de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 69 del presente Reglamento, deban ser objeto de control y seguimiento”, disponiendo que “la inclusión en este plan será notificada individualmente a los deportistas afectados. La ejecución de los mismos seguirá los criterios previstos en el Plan y su realización se acordará con la Agencia Estatal Antidopaje en función de la disponibilidad de los laboratorios”.

El artículo 42 citado regula la *base de datos de control del dopaje, estableciendo lo siguiente:*

*“1. Los datos necesarios para establecer el Plan de Distribución de Controles, así como los generados durante la elaboración del plan y su seguimiento, formarán parte de una Base de Datos de Control del Dopaje, que bajo la supervisión del Presidente de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje será administrada por la misma.*

*2. Esta base de datos se tratará de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Sólo el Presidente de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje podrá determinar, según lo establecido en la Ley Orgánica 7/2006, el acceso restringido a los correspondientes ficheros y en su caso datos específicos, en los términos previstos en la citada Ley Orgánica 15/1999.*

*3. Se incluirán en la base de datos de control del dopaje, en un ámbito restringido y administrada por un funcionario del Consejo Superior de*



*Deportes, adscrito funcionalmente a la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje y designado a tal efecto:*

- a) Los datos que permitan la identificación y localización de los deportistas con licencia susceptibles de ser sometidos a control que la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje autorice. Estos datos deberán ser facilitados por las Federaciones deportivas españolas a la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje en la forma que este organismo determine.*
- b) Los datos relacionados con los controles de dopaje realizados y sus resultados que sean definidos por la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje.*
- c) Los parámetros analíticos del Perfil Hormonal Esteroideo. Estos datos deberán ser facilitados a la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje, en la forma que la misma determine.*
- d) Los parámetros hematológicos obtenidos. Estos datos deberán ser facilitados a la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje en la forma que la misma determine, con el fin de poder optimizar el seguimiento de los controles de dopaje realizados a los correspondientes deportistas.*
- e) Los datos complementarios que resulten necesarios para la identificación personal de los deportistas incluidos en Planes Individualizados de Controles.”*

El informe de esta Agencia de 9 de noviembre de 2008 consideraba conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 el tratamiento al que ahora se está haciendo referencia, señalando lo siguiente:

*“(…) la Convención de 19 de noviembre de 2005 establece en su artículo 12 a) que los Estados Parte deberán, cuando proceda “alentar y facilitar la realización de los controles del dopaje, de forma compatible con el Código (Mundial Antidopaje), por parte de las organizaciones deportivas y las organizaciones antidopaje de su jurisdicción, en particular los controles por sorpresa, fuera de las competiciones y durante ellas”.*

*A su vez, si bien el artículo 4.2 de la Convención de 19 de noviembre de 2005 señala que el Código Mundial Antidopaje, incorporado a aquélla como apéndice, no forma parte integrante de la Convención, “los Estados Parte se comprometen a respetar los principios del Código como base de las medidas previstas en el Artículo 5 de la presente Convención”, debiendo además adoptar medidas apropiadas, acordes con los principios del propio Código, según el artículo 3 a).*





*Pues bien, el Código Mundial Antidopaje si habilita este tipo de prácticas individualizadas. Así, por ejemplo, el artículo 14.3 se refiere a “los deportistas que hayan sido identificados por su federación internacional o por su organización nacional antidopaje para ser incluidos en un grupo objetivo de deportistas sometidos a controles fuera de la competición”.*

*Por tanto, el citado Convenio Internacional ratificado por España permite efectuar una interpretación extensiva del artículo 9.1 de la Ley Orgánica 7/2006 que habilitaría la realización de estos planes individualizados.”*

De este modo, la previsión contenida en el artículo 3.2 b) no hace sino plasmar en una norma con rango de Ley el tratamiento ya previsto en el Real Decreto 641/2009, que fue considerado ajustado a lo exigido por la Ley Orgánica 15/1999 por el citado informe de esta Agencia Española de Protección de Datos, en virtud de lo preceptuado por la Convención de 19 de octubre de 2005. Por ello, la habilitación legal para el tratamiento de datos de carácter personal derivado de dicho precepto resulta conforme a lo dispuesto en la citada Ley Orgánica 15/1999.

## VI

Dicho lo anterior, y refiriéndonos nuevamente a las previsiones de ambos Anteproyectos referidas a la transmisión de datos a la Agencia Mundial Antidopaje, las mismas suponen una cesión de datos de carácter personal, dado que implican la revelación de los datos a los que las mismas se refieren a un tercero distinto del interesado.

Para que dichas cesiones puedan resultar conformes a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 deberá contarse con el consentimiento del interesado, tal y como impone su artículo 11.1 o encontrarse en uno de los supuestos específicos establecidos en el artículo 11.2 de dicho texto legal.

A su vez, cuando se trate de datos relacionados con la salud, como sucederá en el caso de comunicación al sistema ADAMS de los datos relativos a las autorizaciones de uso terapéutico concedidas, la cesión deberá resultar conforme a lo dispuesto en el artículo 7.3, según el cual “los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una Ley o el afectado consienta expresamente”.

Por otra parte, dado que la Agencia Mundial Antidopaje es una fundación sometida al derecho Suizo y que el sistema ADAMS se encuentra alojado en Canadá, la cesión señalada constituirá asimismo una transferencia internacional de datos, definida por el artículo 5.1 s) del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 como “tratamiento de datos que supone



una transmisión de los mismos fuera del territorio del Espacio Económico Europeo, bien constituya una cesión o comunicación de datos, bien tenga por objeto la realización de un tratamiento de datos por cuenta del responsable del fichero establecido en territorio español”, por lo que quedará sometida al régimen establecido en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica 15/1999 y en el Título VI de su Reglamento de desarrollo.

En este sentido, será preciso determinar si concurren los requisitos legalmente exigibles tanto para la cesión de datos como para su transferencia internacional, toda vez que el artículo 65 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 dispone claramente que “la transferencia internacional de datos no excluye en ningún caso la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en el presente Reglamento”.

En caso de que la transferencia internacional de datos se produjese a Suiza, sería de aplicación lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, a cuyo tenor “No será necesaria la autorización del Director de la Agencia Española de Protección de Datos para la realización de una transferencia internacional de datos que tuvieran por importador una persona o entidad, pública o privada, situada en el territorio de un Estado respecto del que se haya declarado por la Comisión Europea la existencia de un nivel adecuado de protección”, toda vez que el nivel de protección de datos en dicho Estado ha sido declarado adecuado por la Comisión Europea mediante Decisión 2000/518/CE, de 26 de julio de 2000, con arreglo a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al nivel de protección adecuado de los datos personales en Suiza.

En el caso de Canadá, sin embargo la cuestión no resulta terminante. En este sentido, ciertamente existe una decisión referida al nivel de protección de datos en Canadá, cual es la Decisión 2002/2/CE, de 20 de diciembre de 2001 con arreglo a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la adecuación de la protección de los datos personales conferida por la ley canadiense “Personal Information and Electronic Documents Act” (PIPEDA). Sin embargo, la aplicación de la citada norma al sistema ADAMS no resulta clara.

Así lo ha puesto de manifiesto el Grupo de Trabajo de Autoridades de Protección de Datos, creado por el artículo 29 de la Directiva 95/46/CE en el Segundo dictamen, 4/2009, sobre la Norma internacional para la protección de la intimidad y los datos personales de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), sobre disposiciones relacionadas del Código AMA y sobre otros aspectos relacionados con la intimidad en el contexto de la lucha contra el dopaje en el deporte por parte de la AMA y de las organizaciones nacionales antidopaje, adoptado el 6 de abril de 2009, en cuyo apartado 3.4, tras indicarse que la Ley Canadiense anteriormente citada solamente se aplica a las entidades privadas



que recojan, utilicen o divulguen datos personales en sus actividades comerciales se señala lo siguiente:

*“El acuerdo ADAMS describe la AMA como una organización sin ánimo de lucro, por lo que queda fuera del alcance de la PIPEDA. No se dispone de ninguna otra información que sugiera que los datos personales transferidos desde la UE se transfieren a ninguna otra organización que no sea la AMA, independientemente de los contratos de servicio que ésta pueda tener con terceros.*

*En su carta de 10 de noviembre de 2008 al Grupo del artículo 29, el Comisario canadiense para la protección de la intimidad informa de que, según su análisis, la Decisión sobre el carácter adecuado de la protección de la PIPEDA no se aplica a la AMA, dado que sus actividades diarias no son de carácter comercial. Sin embargo, dice que la PIPEDA se aplica a CGI, una empresa comercial con la que se afirma que AMA ha firmado un acuerdo para el mantenimiento de ADAMS. Los detalles de este acuerdo se desconocen, por lo que no es posible pronunciarse sobre si efectivamente los derechos de los interesados se han visto afectados por el mismo.*

*Tomando como base la información recibida del Comisario canadiense para la protección de la intimidad, que para el Grupo es la autoridad competente en este contexto, no puede decirse con certeza que la PIPEDA se aplique a la AMA o a ADAMS.”*

Consecuencia de todo lo que se ha venido indicando será, por tanto que las comunicaciones de datos previstas en los Anteproyectos sometidos a informe deberán resultar amparadas por los artículos 11 y 7 de la Ley Orgánica 15/1999 en cuanto constituyen supuestos de cesión de datos de carácter personal y por el artículo 34, apartados a) a j) de dicha Ley Orgánica en cuanto impliquen una transferencia internacional de datos al sistema ADAMS.

Para dar respuesta a estas cuestiones deberá tenerse en cuenta tanto lo indicado en informes anteriores de esta Agencia ya citados con anterioridad como en los dictámenes emitidos por el Grupo de Trabajo del artículo 29 de la Directiva 95/46/CE entre los que, además del mencionado en este apartado del presente informe, se encuentra el Dictamen 3/2008 sobre el proyecto de norma internacional del Código Mundial Antidopaje para la protección de la intimidad, emitido el 1 de agosto de 2008.

## VII

Partiendo de lo que acaba de indicarse, deberá a continuación analizarse si las cesiones de datos establecidas en los Anteproyectos sometidos a informe resultan conformes a lo dispuesto en la Ley Orgánica



15/1999, para lo cual será preciso que las mismas se encuentren amparadas en lo dispuesto en el artículo 11 de dicha Ley Orgánica, con la excepción de la referida a las autorizaciones de uso terapéutico y los datos referidos a los análisis llevados a cabo, que al incorporar datos de salud relacionados con el tratamiento médico al que se somete el deportistas, deberá encontrar apoyo en lo dispuesto en el artículo 7.3 de la propia Ley Orgánica.

Para ello, se prescindirá en este momento del análisis que pudiera derivarse del hecho de que el sistema al que se comunicarán los datos se encuentre en Canadá, así como de las consideraciones que debieran efectuarse en relación con la referencia concreta efectuada en distintos lugares de los Anteproyectos al propio sistema ADAMS.

El artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. No obstante, este consentimiento no será preciso, según el artículo 11.2 a) cuando la cesión se encuentre amparada en una norma con rango de Ley o cuando. Conforme al artículo 11.2 c) “el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros”, si bien “en este caso la comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a la finalidad que la justifique”. Por su parte, conforme al artículo 7.3 de la Ley Orgánica, los datos relacionados con la salud únicamente podrían ser objeto de cesión en caso de que el interesado prestase su consentimiento expreso o exista una norma con rango de Ley que así lo establezca por razones de interés público.

En este mismo sentido, el apartado 6.1 de la norma internacional para la protección de los datos personales y su confidencialidad, Anexa al Código Mundial Antidopaje establece que las *organizaciones antidopaje* sólo deberán tratar datos personales:

- por motivos legales válidos, entre los que pueden incluirse el cumplimiento de obligaciones legales, el cumplimiento de un contrato o la protección de intereses vitales del *participante* y otras personas; o bien
- cuando ello esté permitido, con el consentimiento informado de un *participante* u otra persona, con sujeción a las excepciones previstas en los Artículos 6.3.b y 6.4 de la presente *Norma Internacional*.

Ciertamente los Anteproyectos sometidos a informe establecen, precisamente, una serie de habilitaciones legales para que la cesión de determinados datos a la Agencia Mundial Antidopaje pueda tener lugar. Sin

embargo, debe recordarse que esta Agencia viene reiteradamente señalando, y así lo hizo al emitir el informe correspondiente al Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Salud y Lucha contra el Dopaje en el Deporte, que la mera inclusión en un Proyecto normativo de una habilitación expresa para el tratamiento de los datos no implica que la misma haya de ser considerada sin más conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, siendo preciso analizar si la misma resulta conforme a los principios de protección de datos y, en particular, a los establecidos en el artículo 4 de la citada Ley Orgánica. De este modo, tal y como impone el artículo 4.1 “los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”. Igualmente, conforme al artículo 4.2 “los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos”.

## VIII

En este sentido, debe analizarse si en el presente caso podrá efectivamente contarse con el consentimiento del interesado, teniendo en cuenta que la Ley Orgánica 15/1999 define el mismo en su artículo 3 h) como toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, mediante la que el interesado consienta el tratamiento de datos personales que le conciernen”.

En particular, es preciso recordar que el Real Decreto 641/2009 ya hace referencia al mencionado consentimiento, cuando establece en su artículo 45.1 b), en relación con la cesión de los datos de localización del deportista, que “los deportistas que se incluyan en el Plan Individualizado de Controles deberán proporcionar una información trimestral sobre su localización habitual, cumplimentando con este fin el formulario que por Resolución apruebe el Presidente del Consejo Superior de Deportes, manteniendo en todo caso la siguiente información mínima: (...) b) Una cláusula de consentimiento informado del deportista por la que consiente en ceder los datos facilitados a otras organizaciones antidopaje, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgánica 7/2006”.

El Grupo creado por el artículo 29 de la Directiva 95/46/CE ya ha analizado en su segundo dictamen 4/2009, ya citado con anterioridad, si el consentimiento del interesado puede considerarse en este caso causa legitimadora suficiente para el tratamiento de los diversos datos cuya cesión a la Agencia Mundial Antidopaje establecen los Anteproyectos sometidos a informe. Así, en el apartado 3.3 del citado dictamen se indica lo siguiente:

*“El Grupo lamenta que no se tuvieran en cuenta sus observaciones sobre la validez del consentimiento del participante. El Grupo mantiene*





*que tal consentimiento no cumple los requisitos del artículo 2, letra h), de la Directiva 95/46/CE, que define el consentimiento como «toda manifestación de voluntad, libre, específica e informada, mediante la que el interesado consienta el tratamiento de datos personales que le conciernan». Las sanciones previstas en caso de eventual negativa de los participantes a cumplir las obligaciones del Código (por ejemplo, suministrar documentos sobre el paradero) impiden que el Grupo considere que el consentimiento se daría libremente en modo alguno.*

*Además, la Directiva 95/46/CE prohíbe el tratamiento de datos confidenciales, tales como los referentes a la salud y los que revelan el origen racial y étnico, salvo que se pueda encontrar un fundamento jurídico válido en el artículo 8 de la Directiva. El artículo 6.2 de la Norma para la protección de la intimidad sugiere que el tratamiento de datos confidenciales pudiera fundamentarse en el consentimiento. En principio, el artículo 8, apartado 2, letra a), de la Directiva establece que el consentimiento es un fundamento del tratamiento. Sin embargo, las observaciones hechas antes en relación con el consentimiento también se aplican en este contexto.*

*Además, el Grupo recuerda que la Directiva no permite el tratamiento de datos relativos a infracciones fundamentado en el consentimiento del interesado (artículo 8, apartado, 5 de la Directiva 95/46/CE).*

*En conclusión, el tratamiento de los datos no puede fundamentarse en el consentimiento tal como se define en el artículo 7, letra a), y en el artículo 8, apartado 2, letra a), de la Directiva 95/46/CE.”*

El dictamen prosigue analizando las posibles causas que podrían legitimar el tratamiento de datos de carácter personal por parte de la Agencia Mundial Antidopaje, analizando si las mismas podrían encajar en los artículos 7 c), 7 e) y 8.4 de la Directiva 95/46/CE. El primero de ellos dispone que será posible el tratamiento cuando el mismo “es necesario para el cumplimiento de una obligación jurídica a la que esté sujeto el responsable del tratamiento”. Por otra parte, según el artículo 7 e), dicho tratamiento podrá llevarse a efecto cuando “es necesario para el cumplimiento de una misión de interés público o inherente al ejercicio del poder público conferido al responsable del tratamiento o a un tercero a quien se comuniquen los datos”. Por último, conforme al artículo 8.4 dispone, en relación con el tratamiento de datos especialmente protegidos, que “siempre que dispongan las garantías adecuadas, los Estados miembros podrán, por motivos de interés público importantes, establecer otras excepciones, además de las previstas en el apartado 2, bien mediante su legislación nacional, bien por decisión de la autoridad de control”.

El dictamen señala lo siguiente:



*“Podría fundamentarse quizás en el artículo 7, letra c), y en el artículo 8, apartado 4, de la Directiva, si la normativa vigente autoriza a las organizaciones antidopaje a proceder al tratamiento. Si se fundamenta en el artículo 8, apartado 4, el Grupo recuerda que la legislación nacional o la decisión de la autoridad de control debe estar condicionada a la existencia de las garantías adecuadas en cuanto a la protección de la intimidad y de los datos y por motivos de interés público nacional importante. Así pues, según el artículo 8, apartado 4, el interés público importante de un tercero no serviría de fundamento.*

*Sin perjuicio de las observaciones sobre el consentimiento, el Grupo observa con satisfacción que la versión actual de la Norma establece que las organizaciones antidopaje solamente tratarán los datos personales si la ley vigente les autoriza explícitamente a hacerlo.*

*El Grupo opina que el artículo 7, letra e), de la Directiva 95/46/CE podría servir de base jurídica del tratamiento, en la medida que las OAD tengan naturaleza pública que incluya una misión pública nacional claramente definida que las autorice conforme al derecho nacional a tratar los datos necesarios para cumplir esta misión cumpliendo las disposiciones de la Directiva según hayan sido incorporadas al derecho nacional. Sin embargo, el Grupo sostiene que sería muy difícil que las organizaciones antidopaje invocaran únicamente su interés legítimo (artículo 7, letra f), de la Directiva). Según esta disposición, las OAD deberían realizar una «prueba de la intimidad», sopesando por una parte los intereses del responsable y por otra el interés y los derechos fundamentales del interesado. La gravedad de las intrusionas en la intimidad resultantes de la lucha contra el dopaje, tal y como fue concebida y ejecutada por la AMA, debería tenerse muy presente en este contexto. El Grupo recuerda además que solamente pueden tratarse los datos necesarios para un determinado propósito y que no debe existir ningún otro medio de alcanzar el mismo propósito que suponga una menor intrusión.*

*Además, según lo explicado anteriormente, estos fundamentos jurídicos no bastarían para el tratamiento de datos confidenciales.*

*En especial, por lo que respecta al tratamiento de datos médicos, por ejemplo para las exenciones por uso terapéutico, el único fundamento posible es la legislación nacional que cumpla los requisitos del artículo 8, apartado 4, de la Directiva 95/46/CE.*

*En cuanto al tratamiento de la información sobre sanciones, el tratamiento de datos relativos a infracciones sólo puede efectuarse bajo el control de la autoridad pública o si hay previstas garantías específicas en el Derecho nacional, sin perjuicio de las excepciones que podrá establecer el Estado miembro basándose en disposiciones nacionales*



*que prevean garantías apropiadas y específicas (artículo 8, apartado 5, de la Directiva).*

*Por lo tanto, a menos que el derecho nacional o la autoridad en materia de protección de datos del Estado miembro en el que actúa el responsable ofrezca un fundamento para el tratamiento de datos de sobre infracciones a este efecto, las organizaciones antidopaje de los Estados miembros no pueden tratar datos sobre infracciones, ni divulgándolos en Internet ni tratándolos en otros registros.”*

## IX

Centrándonos en la existencia en este caso de una habilitación legal legitimadora de la cesión de los datos a la Agencia Mundial Antidopaje y a otras organizaciones antidopaje que pudieran tener la condición de competentes para la realización de los controles, debe recordarse que el artículo 36 de la Ley Orgánica 7/2006, no modificado por los Anteproyectos sometidos a informe, dispone que “Los datos y ficheros relativos a los controles de dopaje podrán ser cedidos, en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, a los organismos públicos o privados de los que nuestro país sea parte y que participen en la lucha contra el dopaje en el ámbito deportivo, en el marco de lo que dispongan los compromisos internacionales legalmente vinculantes asumidos por España”.

Respecto de este precepto, el informe de esta Agencia de 25 de octubre de 2005 recordaba que “existen otros instrumentos en materia de lucha contra el dopaje, como el Código Mundial Antidopaje. Sin embargo, dichos instrumentos carecen de eficacia normativa en el derecho español. No obstante, es posible que en virtud de otros instrumentos internacionales el Estado español pueda contraer determinados compromisos, en todo caso vinculantes para aquél, que revistan el adecuado valor normativo como para equipararse a los “tratados o convenios en los que sea parte España”, fundando así la transferencia internacional de los datos”.

Sin embargo, en el momento presente debe tenerse en cuenta, tal y como se indica en la Exposición de Motivos de los Anteproyectos objeto del presente informe, el efecto producido como consecuencia de la entrada en vigor de la Convención de 19 de octubre de 2005, cuyo artículo 3 b) establece el deber de los Estados de “promover la cooperación internacional entre los Estados Parte y las principales organizaciones encargadas de la lucha contra el dopaje en el deporte, en particular la Agencia Mundial Antidopaje”, añadiendo específicamente el artículo 14 que “los Estados Parte se comprometen a prestar apoyo al importante cometido de la Agencia Mundial Antidopaje en la lucha internacional contra el dopaje”.



El artículo 16 impone asimismo a los Estados los deberes de “facilitar la tarea de la Agencia Mundial Antidopaje y otras organizaciones antidopaje que actúan de conformidad con el Código, a reserva de los reglamentos pertinentes de los países anfitriones, en la ejecución de los controles a sus deportistas, durante las competiciones o fuera de ellas, ya sea en su territorio o en otros lugares”, “alentar y apoyar los acuerdos de controles recíprocos entre las organizaciones antidopaje designadas, de conformidad con el Código” y “reconocer mutuamente los procedimientos de control del dopaje de toda organización antidopaje y la gestión de los resultados de las pruebas clínicas, incluidas las sanciones deportivas correspondientes, que sean conformes con el Código”.

Al propio tiempo, debe igualmente recordarse que, conforme se indicó en un lugar anterior, la Ley Orgánica 7/2006 tiene por objeto fundamental la garantía del derecho a la protección de la salud, de conformidad con lo establecidos en el artículo 43.2 de la Constitución, teniendo las medidas adoptadas por la Ley Orgánica la finalidad última de garantizar adecuadamente la salud del deportista evitando la ingesta de sustancias o la realización de métodos que pudieran perjudicar la misma. Así lo señala la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica y lo ha ratificado esta Agencia Española de Protección de Datos en los diversos informes emitidos en relación con la misma y con sus disposiciones de desarrollo.

Por otra parte, de los deberes asumidos por los Estados parte signatarios de la Convención de 19 de octubre de 2005 se desprende la necesidad de facilitar la actuación de la Agencia Mundial Antidopaje y garantizar el cumplimiento de sus cometidos, así como el respeto a los principios contenidos en el Código Mundial Antidopaje, dado que si bien el artículo 4.2 de la Convención señala que el Código Mundial Antidopaje, incorporado a aquélla como apéndice, no forma parte integrante de la Convención, “los Estados Parte se comprometen a respetar los principios del Código como base de las medidas previstas en el Artículo 5 de la presente Convención”, debiendo además adoptar medidas apropiadas, acordes con los principios del propio Código, según el artículo 3 a).

Impuesto este deber por la Convención resulta amparado por el mismo la atribución a la Agencia Mundial Antidopaje de la condición de interesado en los procedimientos Administrativos tramitados por las autoridades españolas como consecuencia de la posible comisión de las infracciones establecidas en la Ley Orgánica 7/2006 a los efectos previstos en la Ley 30/1992, lo que legitimaría la comunicación a la misma de las citadas resoluciones y de la notificación efectuada a los restantes interesados en el procedimiento a fin de que pudiesen, en su caso, interponerse los recursos legalmente previstos.

Teniendo en consideración las anteriores premisas, los intercambios de información derivados de la aplicación de la Ley Orgánica 7/2006, en la redacción establecida en los Anteproyectos sometidos a informe tendrían como

objeto la finalidad de prevención de la salud perseguida con carácter general por la Ley, tal y como hemos señalado con anterioridad, trayendo además su causa de lo establecido en una norma internacional ratificada por España (y, en consecuencia, legalmente vinculante), en cuyo artículo 16 se reconoce expresamente que “la lucha contra el dopaje en el deporte sólo puede ser eficaz cuando se pueden hacer pruebas clínicas a los deportistas sin previo aviso y las muestras se pueden transportar a los laboratorios a tiempo para ser analizadas”.

En consecuencia, y sin perjuicio de lo que se señalará a continuación en relación con las transferencias internacionales de datos, la comunicación a la Agencia Mundial Antidopaje de los datos referidos a las resoluciones adoptadas en los procedimientos sancionadores, los resultados de los análisis realizados, los datos de localización del deportista y las autorizaciones de uso terapéutico resultaría conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, al encontrar su apoyo legal en lo dispuesto en la Convención de 19 de octubre de 2005 y en el interés público derivado de la necesidad de preservar la salud del deportista.

## X

Como se señaló con anterioridad, tanto el Anteproyecto de Ley como el de Ley Orgánica complementaria de aquélla, prevén que la cesión de datos se llevará a cabo mediante la introducción de los mismos en el sistema ADAMS en determinados casos. Así, se establece dicha comunicación, respectivamente, para los datos relacionados con las autorizaciones de uso terapéutico y para las que se refieren a la localización del deportista.

En los informes de esta Agencia Española de Protección de Datos al entonces Anteproyecto de Ley Orgánica y al entonces borrador de Proyecto de Reglamento de desarrollo de la misma ya se analizó la legitimación para la recogida y tratamiento de estos datos y la extensión que el mismo podría tener. Del mismo modo, en el presente informe se ha analizado la legitimación para el tratamiento de datos necesarios para el sometimiento a determinados deportistas a un plan individualizado de controles y para la comunicación de datos a la Agencia Mundial Antidopaje.

No obstante, como también se ha indicado con anterioridad, es preciso tener en consideración que el sistema en el que se incorporarán los datos se encuentra ubicado en Canadá, sin que resulte clara la aplicación al mismo de la legislación canadiense respecto de la cual la Comisión Europea ha acordado la existencia de un nivel adecuado de protección, por lo que procede ahora determinar si la transferencia internacional que implicará la introducción de los datos en el sistema ADAMS y su posible acceso por terceras entidades resulta conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999.



Para ello, sería necesario que la transferencia se encontrase amparada en alguno de los supuestos establecidos en las letras a) a j) del artículo 34 de la Ley Orgánica, toda vez que ni se prevé la aportación de las garantías a las que se refiere el artículo 69 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica ni sería aplicable el supuesto enunciado en la letra k) del artículo 34, al no ser clara la aplicación de la legislación canadiense considerada adecuada.

El segundo dictamen del Grupo creado por el artículo 29 de la Directiva 95/46/CE analiza la legitimada de las transferencias internacionales de datos al sistema ADAMS en su apartado 3.4, concluyendo en la imposibilidad de fundar las mismas en el consentimiento del interesado, en virtud de los argumentos ya reproducidos con anterioridad, y planteando la dificultad de considerar aplicables al caso las excepciones previstas en el artículo 26.1 de la Directiva, que vienen a transponerse al derecho español mediante los apartados a) a j) del artículo 34 de la Ley Orgánica 15/1999.

En particular, el Grupo se plantea si es posible la transferencia fundada en el artículo 26.1 d) de la Directiva, según la cual no sería precisa la autorización para una transferencia internacional de datos cuando la misma “sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguardia de un interés público importante, o para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un procedimiento judicial”.

Al propio tiempo, la Ley Orgánica 15/1999 legitima en el apartado a) de su artículo 34 la transferencia internacional de datos cuando la misma “resulte de la aplicación de tratados o convenios en los que sea parte España”.

Deben nuevamente traerse a colación en este punto las consideraciones efectuadas en lugares anteriores de este informe en cuanto al hecho de que la comunicación de datos a la Agencia Mundial Antidopaje y a las autoridades competentes en materia de lucha contra el dopaje traen su causa, en primer lugar, de lo establecido en el Convenio de 19 de octubre de 2005 y, en segundo término, de la finalidad esencial de protección de la salud de los deportistas establecida en la propia Ley Orgánica 15/1999, con apoyo en el artículo 43 de la Constitución.

En garantía de dicho objetivo el establecimiento de un plan de controles a aquellos deportistas que desarrollan su actividad no sólo en el ámbito de competiciones respecto de las que es posible la práctica de los controles por parte de las autoridades designadas en la Ley Orgánica, sino en ámbitos distintos en los que dicha autoridad carece de competencia por razón del territorio sólo será posible en caso de que por las organizaciones que en cada momento sean competentes pueda conocerse efectivamente la posibilidad de desarrollar la práctica de los controles en su territorio, lo que implica poder conocer el lugar en que el deportista podría encontrarse para la realización de esos controles, por otra parte previstos en el Convenio e 19 de octubre de 2005, y en consecuencia sus datos de localización.

Del mismo modo, el conocimiento por esas autoridades de las autorizaciones de uso terapéutico concedidas al deportista resulta igualmente necesario a fin de garantizar que el tratamiento o consumo de las sustancias debidamente autorizadas pueda llevarse cabo sin menoscabo del adecuado desarrollo de la actividad del deportista. Así, el artículo 8.1 del Convenio dispone en su primer inciso que “los Estados Parte deberán adoptar, cuando proceda, medidas encaminadas a restringir la disponibilidad de sustancias y métodos prohibidos, a fin de limitar su utilización en el deporte por los deportistas, a menos que su utilización se base en una exención para uso con fines terapéuticos”, añadiendo el artículo 8.2 que “los Estados Parte deberán adoptar, o instar a adoptar, si procede, a las entidades competentes de su jurisdicción, medidas encaminadas a impedir o limitar el uso y posesión por los deportistas de sustancias y métodos prohibidos, a menos que su utilización se base en una exención para uso con fines terapéuticos” y concluyendo el artículo 8.3 que “ninguna medida adoptada en cumplimiento de la presente Convención impedirá que se disponga, para usos legítimos, de sustancias y métodos que de otra forma están prohibidos o sometidos a control en el deporte”.

Igualmente, y en particular para las autorizaciones de uso terapéutico, cabe recordar que el artículo 34 g) de la Ley Orgánica legitima la transferencia internacional cuando la misma “sea necesaria para la celebración o ejecución de un contrato celebrado o por celebrar, en interés del afectado, por el responsable del fichero y un tercero”.

Ciertamente, en el supuesto presente no nos encontramos ante la existencia de un contrato celebrado entre las autoridades establecidas en la Ley Orgánica 7/2006 y la Agencia Mundial Antidopaje. Sin embargo, es igualmente cierto que la transmisión de los datos al sistema ADAMS garantizará el conocimiento, en interés del deportista, de los consumos o tratamientos autorizados por parte de aquellas autoridades antidopaje que pudieran encontrarse en cada momento legitimadas para la realización de los controles.

A la vista de todo ello, cabría considerar que las transferencias internacionales de datos establecidas en relación con el sistema de información ADAMS resulta conformes a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999.

## XI

Como se ha indicado en un lugar anterior, la legitimación para el tratamiento de los datos del deportista y su comunicación a la Agencia Mundial Antidopaje deberá además cumplir los principios contenidos en la Ley Orgánica 15/1999 y su Reglamento de desarrollo, entre los que se encuentran los de

proporcionalidad, consagrado en el artículo 4.1, y transparencia o información al interesado, previsto en el artículo 5.

Respecto de éste último, el deportista debería ser claramente informado acerca del tratamiento de sus datos de carácter personal, con conocimiento de qué datos serán objeto de tratamiento y, particularmente, que dichos datos serán objeto de cesión a la Agencia Mundial Antidopaje o a otros organismos antidopaje, cuando así se prevea en la Ley Orgánica.

La Ley Orgánica ya establece a lo largo de su articulado, tal y como se analizó al comienzo de este informe, diversas previsiones específicas relativas al cumplimiento de la Ley Orgánica y en particular al deber de información. Al propio tiempo, la Norma internacional para la protección de los datos personales y la confidencialidad del Código Mundial Antidopaje establece en su apartado 7.1 el contenido mínimo que deberá incorporar la citada información, dándose así cumplimiento al principio de transparencia.

Respecto del principio de proporcionalidad, el mayor problema dentro de los supuestos de cesión previstos en los Anteproyectos sometidos a informe e plantea en lo referente a los datos de localización del deportista. A tal efecto, en el régimen actualmente vigente, el artículo 45 del Real decreto 641/2009 establece en su apartado 1 el alcance de la información que deberá ser facilitada por el deportista, previendo expresamente el artículo 45.2 el sometimiento a la Ley Orgánica 15/1999 de los tratamientos llevados a cabo con dichos datos. Este precepto fue objeto de informe de esta Agencia cuyas observaciones, salvo en lo referente a la supresión de la referencia efectuada al consentimiento del deportista, al considerarse la misma inadecuada de conformidad con lo señalado en lugares anteriores de este informe, fueron tomadas en consideración en la redacción final del precepto.

El problema se plantearía en caso de que se solicitase la inclusión en el sistema ADAMS de información adicional a la señalada en el citado precepto. En este sentido resulta necesario traer nuevamente a colación el segundo dictamen emitido por el Grupo creado por el artículo 29 de la Directiva, en cuyo apartado 3.1 se analiza la aplicación del principio de proporcionalidad en los siguientes términos:

*El Grupo considera que es proporcionado exigir datos personales relativos a la franja específica de sesenta minutos y requerir que se facilite el nombre y la dirección de cada lugar donde el deportista se entrenará, trabajará o llevará a cabo a cualquier otra actividad regular (solamente para lo relacionado con la rutina habitual del deportista, véase el artículo 11.3 de la Norma internacional sobre control). Los ejemplos presentados indican que, aparte de la franja de sesenta minutos y la residencia, la información correspondiente a cuatro horas al día se considera proporcionada. El Grupo espera por lo tanto que la*



*AMA no exija que las OAD recojan más información sobre el paradero que la descrita anteriormente.*

*Por otra parte, las solicitudes de información sobre cualquier actividad habitual distinta de las competiciones y entrenamientos podrían considerarse desproporcionadas cuando se refieran a deportistas que no son de alto nivel y que participan en competiciones nacionales e internacionales. Esto se debe a que la propia AMA ha indicado que «para los deportistas que compiten a un nivel más bajo, las normas son mucho menos estrictas. Para dichos deportistas, podría bastar con una información sobre el paradero limitada a los lugares y fechas de las competiciones y entrenamientos, aunque no sería la manera "más eficaz" de realizar controles en opinión de la AMA». La cuestión de si el tratamiento de los datos personales está justificado no se plantea en términos de «eficacia» sino de «necesidad».*

*Además, la AMA debería reconsiderar su petición de que se comuniquen el lugar de residencia para cada día del trimestre siguiente (incluso en caso de alojamiento temporal) (artículo 11.3.1.d. de la Norma internacional sobre control) pues esto parecería cuestionable, teniendo en cuenta que en caso de control por sorpresa «el funcionario de control antidopaje intentará localizar al deportista entre las 7:00 horas y las 22:00 horas» (artículo 2.2 de las directrices para los controles fuera de competición, de junio de 2004). A la luz de los anteriores comentarios sobre los deportistas de menor nivel, esto sería especialmente pertinente para estos últimos.*

*Además, los deportistas deberían conocer los datos personales que están obligados a proporcionar: la nota informativa que se entrega al deportista tiene que especificar si la información detallada sobre su paradero se debe proporcionar con carácter opcional u obligatorio, indicando las consecuencias derivadas de la no comunicación de dicha información."*

Ciertamente, el contenido de la información a facilitar por el deportista no es objeto de regulación por parte de la propia Ley Orgánica, sino por su normativa de desarrollo. No obstante, ha sido preciso poner de manifiesto lo señalado en el mencionado dictamen a fin de que sus consideraciones sean especialmente tenidas en cuenta cuando en el previsible desarrollo reglamentario que se derive de la aprobación de los Anteproyectos sometidos a informe se analice la procedencia o improcedencia de modificar el artículo 45 del Reglamento en su redacción actual.

Por otra parte, el artículo 5.3 de la Ley Orgánica, en la redacción que resultaría de lo previsto en el Anteproyecto de Ley Orgánica sometido a informe, una vez especificada la finalidad del tratamiento, que justificará, como se acaba de indicar, la necesaria aplicación del principio de proporcionalidad,



añade que los datos serán objeto de destrucción cuando ya no sean útiles para dichos fines, reproduciéndose lo señalado a tal efecto en el artículo 14.3 del Código Mundial Antidopaje.

El cumplimiento de dicha previsión, coincidente con el principio establecido en el artículo 4.5 de la Ley Orgánica 15/1999, debería garantizarse mediante el establecimiento, también en sede reglamentaria, de procedimientos que permitan a las autoridades competentes conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 7/2005 requerir a la Agencia Mundial Antidopaje y a los organismos competentes que pudieran acceder a la información la supresión de los mencionados datos una vez cumplida la fecha a la que se refieran los concretos datos de localización.

## XII

Efectuadas todas las anteriores consideraciones, de las que se desprende la conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de las cesiones y transferencias internacionales de datos que se derivan del articulado de los Anteproyectos sometidos a informe, es preciso no obstante efectuar una consideración adicional relacionada con los términos en que se producen dichas habilitaciones cuando se refieren a la inserción de datos en el sistema ADAMS, que además se define expresamente en el Anexo de la Ley Orgánica introducido por el Anteproyecto de Ley.

A nuestro juicio, una vez considerada adecuada la cesión y transferencia de los datos, la referencia expresa a un sistema de información específico resulta inadecuada, dado que desde el punto de vista de la aplicación de las normas de protección de datos, lo relevante para enjuiciar la legitimada para el tratamiento o la cesión de datos personales no será la denominación del repositorio o base de datos donde los mismos se encuentren sino si dicha legitimación concurre en el responsable del tratamiento o cesionario.

Al propio tiempo, esta Agencia considera que el texto resultante de la Ley Orgánica debería mantener la adecuada neutralidad tecnológica, de forma que en caso de que se modificase el sistema de información en el que se introduzcan los datos no fuera necesario igualmente modificar la Ley Orgánica 7/2006.

Debe a tal efecto tenerse en consideración que las tres referencias efectuadas al sistema ADAMS no son sino reproducción literal de lo establecido en el Código Mundial Antidopaje, cuyos requisitos para la modificación carecen de la rigidez exigida por la Constitución Española en la elaboración de las Leyes.

**Por ello, se considera más adecuado a la Ley suprimir las referencias efectuadas en los Anteproyectos sometidos a informe a**





**ADAMS, lo que implica necesariamente su supresión del catálogo de definiciones contenido en el Anexo introducido por el Anteproyecto de Ley, reemplazando las menciones efectuadas en los apartados 1 del artículo único del Anteproyecto de Ley Orgánica y 6 del artículo único del Anteproyecto de Ley, de forma que la expresión “ADAMS” quede reemplazada por “el sistema de información que a tal efecto haya establecido la Agencia Mundial Antidopaje”.**